

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por Refugio Torres, contra la Prefectura política del Partido de Nombre de Dios, que lo juzgó como salteador.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El C. Jefe de Hacienda del Estado, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el reo Refugio Torres ha promovido este recurso de amparo contra los procedimientos de la Jefatura Política del Partido de Nombre de Dios, que lo ha juzgado como salteador, sin sujetarse á las prescripciones de la ley de la materia, según el mismo promoviente.

Sostiene la incompetencia del C. Jefe Político, fundándose en que habiendo sido aprehendido por particulares, y no siendo agentes estos del Jefe Político, la autoridad competente la es el Juez ordinario, ante el cual tenía causa pendiente por indicios de robo.

Si éstas argumentaciones tuvieran en derecho la fuerza suficiente para tomarlas en consideración, darían el resultado de que á ningún salteador ó plagiario podrían juzgar los Jefes Políticos, porque como generalmente estos no tienen fuerza de que disponer, *para calificarla como su agente*, muchas de las aprehensiones de los salteadores se verifican por particulares, y en este caso, según lo expuesto, no deberían ser juzgados por los Jefes Políticos.

Tenemos un sin número de casos en que los reos han sido aprehendidos por CC. particulares, juzgados por los Jefes Políticos y denegado el amparo, bien que no se había hecho mérito de que siendo los salteadores aprehendidos por CC. particulares, no pueden ser juzgados por los Jefes Políticos, sin que haya violación de garantías.

* Esto consiste, en que todos los habitantes de la República deben tenerse como agentes de la autoridad Política, para el efecto de aprehender salteadores y plagiarios. Así debe entenderse por las obligaciones que impone á todos los CC. el reglamento de la ley de plagiarios; arts. 1º, 2º, 3º, 4º y siguientes.

Precisamente esa reglamentación de la ley de plagiarios, tuvo por objeto el que todos los habitantes de cualquier lugar de la República, fuesen agentes para la persecución de los salteadores y plagiarios; y como á la autoridad Política incumbe la vigilancia de la ley reglamentaria, es inconcuso que son sus agentes especialmente los dueños ó encargados de las Haciendas ó Ranchos, según el tenor expreso de la repetida ley reglamentaria. Ni podía esta interpretarse de otra manera, supuesto que en el sentido contrario, sería letra muerta la disposición sobre juzgar pronta y sumariamente á los delinquentes de que se trata; porque siendo, casi siempre, aprehendidos por personas que no están bajo el inmediato servicio del Jefe Político, tendrían que tomar conocimiento del hecho los Jueces ordinarios, y ésta práctica, se advierte á primera vista que sería contraria al espíritu de la ley.

Estando justificado el robo con asalto hecho por Refugio Torres á Cornelio Romo y Dionisio Ramirez, debió ser juzgado como lo fué, por el C. Jefe Político, conforme á la ley de salteadores. Si el delito por el cual tenía causa pendiente no es de los que deban juzgarse conforme á la ley reforida, no por eso deja de haber razón para aplicar la misma ley por el robo con asalto hecho á Romo y Ramirez; y en consecuencia, la ley ha sido bien aplicada, aunque el anterior proceso haya quedado pendiente.

En cuanto al hecho de haber pasado mas término que el señalado por la ley para la pronunciación de la sentencia, está justificado que, deducidos los días feriados, solamente corrieron los quince que la ley de-

marca; y aunque así no fuese, resultaría, que habiendo demorado mas tiempo el proceso, lejos de violarse garantías individuales al quejoso, en cuyo caso procede el amparo, se lo favoreció dándole mas tiempo para arreglar sus pruebas y su defensa: lo que no importa violacion de garantías.

Sostiene tambien el quejoso la incompetencia del Jefe Político, despues de los quince dias en que debió terminar el proceso. Yá se demostró, que no pasó ese término; y sin embargo, suponiendo sin conceder, que hubiese pasado el término, la ley de la materia no dispone que por esa razón cese la jurisdiccion de la autoridad á quien le toca juzgar. En tales casos, cuanto mas podria sostenerse en buen derecho, seria que se incurra en responsabilidad.

Queda pues demostrado, que no ha habido ninguna violacion de garantías por parte del Jefe Político de Nombre de Dios, al juzgar conforme á la ley, al reo Refugio Torres, y aún este lo comprende así, segun el penúltimo párrafo de su escrito de fojas 1. Por todo lo expuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, el Fiscal pide la denegacion del amparo que solicita Refugio Torres, contra los procedimientos del Jefe Político de Nombre de Dios, que lo juzgó como salteador conforme á la ley de la materia.

Durango, Noviembre 25 de 1874.—*Juan Nájera*.—una rúbrica

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 5 de 1874.—*Juan Nájera*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Diciembre 2 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por el reo Refugio Torres, contra el proceso levantado por la Jefatura Política del Partido de Nombre de Dios, en que lo juzgó y lo ha sentenciado á la pena de muerte, por el delito de robo con asalto, cometido en el arroyo de la Carroza, jurisdiccion de aquel

Partido, motivándose la queja en la violacion de una garantía equivalente á la del art. 19 de la Constitucion Federal, ó en la del art. 32 de la de suspension de garantías, de 10 de Abril del corriente año, que, en lo concerniente á la aprehension del reo y al término del juicio, corresponde, en concepto de aquel, la garantía del art. 32 de esta ley, á la del art. 19 de la Constitucion; por lo que ampleado el recurso, ó rectificado en el alegato de buena prueba, se viene á hacer consistir el fundamento de la misma queja, en la triple violacion de los preceptos constitucionales, 14, 16 y 29 parte del 19. Visto el informe de la autoridad responsable, las pruebas rendidas, el parecer fiscal y todo lo mas que era de verse y ver convino.

Considerando, en cuanto á la violacion del art. 14: que cuando la exácta aplicacion de las leyes al hecho porque se juzga y se sentencia, no deba referirse, segun este precepto, á los juicios comunes, y nó á los privativos ó escepcionales, como es el que motiva este recurso, la inexactitud imputada al fallo de la Jefatura de Nombre de Dios, en el proceso en que juzgó á Refugio Torres, no puede justificarse por el hecho de no haber sido los aprehensores de éste, agentes particulares de aquella autoridad, puesto que, ni la jurisdiccion de los Jueces de los saltadores se funda en la demarcacion ó caracter de aquellos agentes, ni está limitada á las circunstancias de la aprehension; y sobre todo, no es ésta, sino el delito de su competencia, el hecho á que ha debido aplicarse y só aplicó la ley que los ha instituido.

Considerando: que menos puede fundarse aquella inexactitud, en el exceso del término del juicio, bajo el cómputo que hace el reo, de los quince dias naturales en que lo juzgó la misma Jefatura; porque ademas de que ésta los ha contado en el concepto legal, sirviéndose solamente de los dias hábiles, con exclusion de los feriados, que es como se cuentan los términos legales, no ha

prorogado, ni dejado pasar intencionalmente aquel término.

Considerando, en cuanto á las violaciones de los arts. 16 y 2ª parte del 19: que una se deduce de otra, y que la del procedimiento indebido de la Jefatura, por falta de jurisdicción, no se ha demostrado, ni puede demostrarse por las circunstancias de la aprehensión, á que en sustancia viene á reducirse el fundamento de este recurso, en que á la vez niega el quejoso á la Jefatura, la jurisdicción con que le formó el juicio, y se la concede solo en el término en que debió formarlo.

Considerando, en fin: que el mismo Refugio Torres es ó ha sido juzgado como salteador, en el concepto en que la citada ley de 10 de Abril dá este nombre á los que en despoblado asaltan y roban con violencia, y con motivo del robo con asalto cometido en el arroyo de Carroza, sin que para los efectos de aquel juicio se hiciera formal acumulacion, ni influyera en su fallo el proceso de otro delito que el mismo Torres hubiera cometido mas antes. Por las consideraciones expuestas, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, y de conformidad con el parecer fiscal, se declara: que la Justicia Federal, no ampara ni protege al reo Refugio Torres, de haber sido juzgado y sentenciado á muerte por la Jefatura Política de Nombre de Dios, por el delito de robo con asalto. Hágase saber, públíquese este fallo en el periódico Oficial del Estado y en el "Semanario Judicial de la Federación," remitiéndose al efecto las copias certificadas; y elévese este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El C. Juez de Distrito interino, definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó por ante mí. Doy fé.—*J. Chavarria*.—*Juan B. Arellano*, secretario.

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 4 de 1874.—*Juan B. Arellano*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 8 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido en favor de Refugio Torres ante el Juzgado de Distrito de Durango, contra la sentencia de muerte á que fué condenado por la Jefatura Política del Partido de Nombre de Dios, juzgándolo como salteador con arreglo á la ley de 10 de Abril del año próximo pasado; el informe con justificacion de la autoridad responsable del acto reclamado; la prueba rendida; el pedimento del C. Promotor fiscal, la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, Se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Durango en 2 do Diciembre del año próximo pasado, que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Refugio Torres contra los actos que se queja.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; públíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron —*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*E. Montes*.—*L. Velasques*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 8 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.